

La consulta plantea, la posibilidad de comunicar los datos de un federado solicitado por una federación autonómica, sin recabar su consentimiento, al amparo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

La transmisión de los datos que refiere la consulta supondrá una cesión de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999, como “toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”. Tal cesión debe sujetarse al régimen general de comunicación de datos de carácter personal que según dispone el artículo 11.1 de la citada Ley Orgánica, “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. Esta disposición se ve complementada en el supuesto que ahora nos ocupa por lo dispuesto en el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica, del cual se desprende que será posible la cesión cuando una Ley lo permita.

En la documentación aportada en la consulta se hace referencia a la Ley 8/1997, de 9 de julio, Canaria del Deporte, en la que en el Título VI, dedicado a la justicia deportiva, contiene artículos aplicables a la cuestión planteada, el primero de ellos el artículo 55 en el que se determina que “La potestad disciplinaria atribuye a sus titulares legítimos la facultad de investigar y, en su caso, sancionar o corregir a las personas o entidades sometidas a la disciplina deportiva, según sus respectivas competencias.”

Así mismo el artículo 56 continúa señalando que “ El ejercicio de la potestad disciplinaria deportiva corresponderá: (...)

c) A las federaciones deportivas canarias, sobre todas las personas que forman parte de su propia estructura orgánica; los clubes deportivos y sus deportistas, técnicos y directivos; los jueces y árbitros y, en general, todas

aquellas personas y entidades que, estando federadas, desarrollan la actividad deportiva correspondiente en el ámbito canario.”

Al amparo de la citada norma podemos concluir que la solicitud efectuada por la Federación Canaria de Atletismo, puede ser atendida comunicándole los datos solicitados, sin recabar el consentimiento del afectado al amparo del artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, en conexión con los artículos 55 y 56 de la Ley 8/1997, de 9 de julio del Deporte Canario.

Dado que la Ley Canaria habilita la cesión de datos, no procede acudir al artículo 11.2 c) de la Ley Orgánica 15/1999. No obstante a los solos efectos informativos indicaremos que amparar una cesión de datos en la condición de federado, exigiría analizar los Estatutos de la federación, por lo que, la incorporación del federado a la organización, con la necesaria aceptación y conocimiento de los Estatutos implicaría el conocimiento por aquél del hecho de la cesión y permitiría amparar la misma en la propia norma estatutaria.

Finalmente, la última cuestión planteada, depende en la mayoría de los casos de las normas que regulen los procedimientos disciplinarios deportivos, por lo que no se puede otorgar una respuesta genérica.